

MARGARITA ROSA BARRERA CORDOBA
Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión
Departamento Administrativo de Hacienda
Alcaldía Santiago de Cali

Asunto: solicitud de concepto jurídico con radicación 202041310100011854

Cordial Saludo:

Acuso recibo de la solicitud cursada en comunicación de la referencia para que este Departamento Administrativo, emita concepto jurídico sobre el organismo competente para la celebración de los contratos correspondientes al recaudo del Impuesto de Alumbrado Público con las respectivas empresas comercializadoras de energía. Esto, teniendo en cuenta que con oficio 201941310100043984 de Noviembre 15 de 2019, se había solicitado el pronunciamiento por parte de este organismo.

Informa en su escrito que mediante los comunicados con radicaciones: Nos. 201941310400063424, 201941310410042884 y 202041310410000604, la Subdirección de impuestos y Rentas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipio ha solicitado a la Unidad de apoyo a la Gestión del D.A. de Hacienda la elaboración de los referidos contratos.

Refiere como antecedentes administrativos del asunto:

i. El Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión del D.A de Hacienda en comunicación con radicación 201941310100032964 de agosto 20 de 2019 dirigida al D.A. de Contratación solicita concepto jurídico con el fin de que se determine el organismo competente para estructurar los contratos correspondientes al recaudo del Impuesto de Alumbrado Público con las respectivas empresas comercializadoras de energía, y previa enunciación de los antecedentes expone su conclusión, respecto de la cual hacemos una sinopsis, así:

“ANTECEDENTES

“1. Que entre el Municipio de Santiago de Cali y ENERGICALI S.A. — ESP (hoy EMCALI - E.I.C.E E.S.P) se suscribió Convenio Interadministrativo en fecha 04 de Agosto de 1997, con el fin de que la empresa comercializadora de energía se comprometiera con la Administración Municipal en prestar el servicio de alumbrado público, la facturación y el recaudo del impuesto con el fin de dar cumplimiento a la

Resolución 043 del 23 de octubre de 1995 emanada por la Comisión de Energía y Gas (GREG), quien regulo de manera general el suministro, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público, autorizando al Municipio a celebrar convenios para la administración, facturación, cobro del servicio de alumbrado público.

2. Que se pactó como duración del mencionado convenio el término de treinta (30) años a partir del perfeccionamiento del convenio y cumplimiento de los requisitos de ejecución.

3. Que mediante modificación (otro sí) No. 6 al convenio, se determinó que el Municipio ejercería directamente la potestad tributaria de administración del impuesto sobre el servicio de alumbrado público y mediante la creación de una cuenta especial a través de la Tesorería Municipal, EMCALI subsistía en la obligación de trasladar todos los recursos recaudados en el mes inmediatamente anterior en el término de diez (10) días hábiles de cada mes respecto del recaudo del mes anterior (...).

4. Que en fecha 21 de diciembre de 2017, mediante modificación (otro sí) No. 9 al convenio, se modificó la Cláusula Sexta, respecto de la conciliación mensual de facturación y recaudo entre el Municipio, estableciendo que dentro de los cinco (5) días siguientes al ingreso del recaudo mensual en la cuenta especial del Municipio, se deberá expedir por parte del Director de Contabilidad de EMCALI, una certificación en la cual conste los ingresos por concepto de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público.

(...)

11. Que mediante oficio No. 201941310400063424 de fecha 11 de junio de 2019, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales manifiesta lo siguiente:

"(...) No obstante y respecto de la elaboración y perfeccionamiento de los contratos con las comercializadoras de energía, la Subdirección del POT y Servicios Públicos (hoy la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS — UAESPM) ha realizado la gestión pertinente respecto a la elaboración de minutas contractuales, sin que se haya finiquitado o culminado ninguno de los mismos; razón por la cual y ante dicha situación, manifestaron posteriormente falta de competencia funcional para el trámite de esta gestión; generando así, la incertidumbre, respecto a cuál es el organismo competente para la elaboración de estos contratos con las respectivas comercializadoras de energía.

En este orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, no es competencia de la Subdirección de impuestos y rentas Municipales, ni de la Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Impuestos, la elaboración de contratos para el cobro del servicio de Alumbrado Público con las Comercializadoras de Energía, por cuanto en los artículos 68 y 69 del decreto mencionado, no se contempla en ninguna de sus funciones, el desarrollo o gestión de dicha actividad contractual.

Así mismo, es importante resaltar que una de las razones primordiales para la falta de competencia, es que la Subdirección de impuestos y rentas Municipales NO ES ORDENADOR DE GASTO y tampoco podemos ser los supervisores del mismo, por la realización de la función fiscalizadora efectuada por la Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Impuestos, lo cual, nos convertiría en juez y parte, violando así principios fundamentales y generando impedimentos legales (...)"

Concluye el Jefe de la unidad de Apoyo a la Gestión:

“Así las cosas teniendo en cuenta la función especial de administrar y supervisar el impuesto de alumbrado público determinado por el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016 en cabeza de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES — UAESPM y en razón a que no existe cuantía determinada para las contrataciones a realizar con las comercializadoras de energía que pueda inferir la aplicación debida del Decreto 412.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, pues si bien preexiste un recaudo histórico, el mismo es variable dependiendo de la facturación de cada mes, este organismo considera indispensable que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA — DACP, genere los lineamientos necesarios para determinar en razón a la competencia funcional, cuantía y naturaleza, que organismo dentro de la administración municipal ostenta la obligación para llevar a cabo la estructuración de los contratos y/o convenios entre el Municipio de Santiago de Cali y las empresas comercializadoras de energía y si los mismos deben ser suscritos por el señor Alcalde...”.

ii. El D.A. de Contratación Pública en atención a la solicitud cursada, emite concepto jurídico con radicación No. 201941350200012254 del 01 de Octubre de 2019, en el cual se realiza un análisis del asunto, manifestando que de conformidad con las funciones estipuladas en el artículo 52 y numeral 3 del artículo 53 del Decreto 411.0.20.0516 de 2016, el organismo competente para dirimir posibles conflictos de competencia y resolver la solicitud de concepto, es el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, y llega a las siguientes conclusiones que sintetizamos, así:

- “Al Departamento Administrativo de Hacienda, órgano de la administración central, le compete la administración de los tributos municipales, que no sean competencia de otro organismo o entidad municipal. La administración de los tributos comprende su recaudación, fiscalización entre otras. Es decir, ejerce como autoridad y ente rector del ramo o especialidad de la administración que le ha sido asignado en materia tributaria en la administración central a la luz del numeral 1 del artículo 23 y numeral 1 del artículo 67 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016.
- Compete a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales-UAESPM, diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral del alumbrado público; dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del alumbrado público; administrar la prestación del servicio de alumbrado público y supervisar los prestadores del mismo.

Es decir, las funciones de este organismo, versan sobre la prestación del servicio de alumbrado público, no el recaudo ni facturación del impuesto del alumbrado público y su propósito es garantizarlo, coordinarlo, supervisar y controlar el servicio de alumbrado público, entre otras, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 221 y 222 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016.

Lo anterior, sin perjuicio del pronunciamiento que el supervisor de la UAESPM debe realizar dentro del lapso de los 45 días siguientes al recaudo, término dentro del cual las operadoras deberán hacer la transferencia del recaudo al Municipio de Santiago de Cali conforme a lo establecido en el artículo 22 del acuerdo 434 de 2017 que modificó el artículo 171 del Acuerdo 321 de 2011, compilado en el artículo 176 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015.

Frente a la pregunta: *¿qué organismo dentro de la administración municipal ostenta la obligación para llevar a cabo la estructuración de los contratos y/o convenios entre el Municipio de Santiago de Cali y las*

empresas comercializadoras de energía y si los mismos deben ser suscritos por el señor alcalde?, el DACP, lo absolverá una vez sea dirimido el posible conflicto de competencia planteado por el DAHM".

Como quiera que el asunto que se plantea dirimir es un posible conflicto negativo de competencia entre dos organismos de la administración, el Departamento Administrativo de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, aun cuando no se advierte entre los antecedentes allegados posición de la Unidad, si es claro que el D.A. de Hacienda en cabeza de sus dependencias ha expresado no tener competencia para celebrar los mencionados contratos, por lo que este Departamento se pronunciará sobre el asunto de conformidad con las funciones asignadas en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516¹ de septiembre 28 de 2016, artículo 52, del siguiente tenor:

"10. Unificar, con carácter prevalente, la doctrina jurídica municipal cuando exista disparidad de criterios jurídicos entre sectores o al interior de un mismo sector, a solicitud del Alcalde y/o del nivel directivo.

11. Intervenir y proponer fórmulas de arreglo directo cuando surjan conflictos administrativos entre organismos y/o entidades descentralizadas del orden municipal".

No obstante, se hace claridad que los lineamientos sobre la celebración de dichos contratos de acuerdo con la naturaleza de los mismos y/o las atribuciones y delegaciones conferidas por el alcalde, y demás aspectos propios de la modalidad contractual en comento, es de competencia del Departamento Administrativo de Contratación, en virtud de lo previsto en el artículo 92 del Decreto Extraordinario 411.010.20.0516 de septiembre 28 de 2016, a quien le corresponde entre otras, funciones:

"(...)"

7. Elaborar, revisar y aprobar, desde su dimensión legal, los contratos, convenios, negocios jurídicos y, en general, los acuerdos de voluntades que deba firmar el Alcalde.(...)"

9. Asesorar a los organismos de la Administración Central Municipal en todas las etapas del proceso contractual".

Igualmente se observa que no se cuenta con información en relación con el recaudo que se haya realizado del impuesto de alumbrado público.

Precisado lo anterior y con el fin de elucidar la consulta formulada, hemos de revisar en primer orden las funciones asignadas a los organismos de la administración central que funcionalmente están relacionados con el asunto, a la luz del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016, así:

La Unidad Administrativa de Servicios Públicos Municipales – UAESPM, fue creada

¹ Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias

mediante el Decreto Extraordinario 411.010.20.0516 de septiembre 28 de 2016, su propósito –artículo 221- y entre las funciones que le asignó en el artículo 222, tenemos:

“Artículo 221. Propósito. Tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del municipio y del servicio de alumbrado público; servicios públicos domiciliarios”.

1. “Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios.
2. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios funerarios.
3. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral de residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios “(…)”
14. Administrar la prestación del servicio de alumbrado público y supervisar los prestadores del mismo”.

Al Departamento Administrativo de Hacienda tiene como propósito:

“Artículo 65. Propósito. El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal tiene como propósito la administración de los tributos municipales que no sean competencia de otro organismo, administrar las finanzas, orientar y garantizar el cumplimiento de la política fiscal, tributaria y contable y gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del plan financiero y plan plurianual del plan de desarrollo vigente de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia”.

Se le asigno entre sus funciones, artículo 67:

1. “La administración de los tributos municipales, que no sean competencia de otro organismo o entidad municipal. La administración de los tributos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias” (...).

En particular a la Subdirección de Rentas e Impuestos le corresponde de acuerdo con sus funciones, artículo 68:

“1. Administrar y analizar los impuestos y rentas municipales competencia de la Subdirección, establecidos tanto en el Estatuto Tributario Municipal, así como en las demás normas que regulan la materia. (...)”

5. Desarrollar e implementar estrategias de divulgación de las normas, fallos, disposiciones legales de carácter nacional, departamental y municipal relacionados con los impuestos y rentas municipales “(…)”

10. Ejecutar los procedimientos y acciones necesarias para la presentación y pago de los impuestos y rentas municipales, de conformidad con el procedimiento tributario municipal y demás normas que regulen la materia. “(…)”

18. Emitir concepto respecto a las normas que regulan los impuestos y rentas municipales, establecidos en el Estatuto Tributario Municipal, así como en las demás normas legales que regulen la materia”. “(…)”

Conforme lo expuesto en precedencia, se observa que de un lado, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Municipales – UAESPM tiene la función entre otras, de *“administrar la prestación del servicio de alumbrado público y supervisar los prestadores del mismo”* y, de otro lado, el Departamento Administrativo de Hacienda-Subdirección de Impuestos y Rentas, tiene por función *“la administración de los tributos municipales que no sean competencia de otro organismo o entidad municipal”*, por lo que se hace necesario examinar en relación con el alumbrado público: 1) el Impuesto de alumbrado público y, 2) la prestación del servicio de alumbrado público, para establecer la diferencia de estos conceptos y/o actividades, para poder determinar el organismo que le corresponde estructurar los contratos de recaudo del impuesto de alumbrado público con las empresas comercializadoras de energía, en el marco del mencionado Decreto Extraordinario.

Hecho el anterior planteamiento procedemos a revisar el marco constitucional, legal y regulatorio, así como la jurisprudencia, correspondientes al Impuesto de alumbrado público y la prestación del servicio de alumbrado público:

El impuesto de alumbrado público tiene su origen en la Ley 97 de 1913², artículo 1º literal D), que autorizó al Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá para crear libremente impuestos y contribuciones, entre estos el impuesto de alumbrado público, organizar su cobro y darle el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental.

Dicha potestad se hizo extensiva en virtud de la Ley 84 de 1915, artículo 1º. literal A) a los demás municipios, por cuanto confirió a los Concejos Municipales las mismas atribuciones, que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo 1º de la Ley 97 de 1913, esto es la creación del impuesto de alumbrado público.

La constitución política establece en el artículo 338:

“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales.

² “Sentencia C-1055 de 2004, en donde se demandaba el literal d) de la Ley 97 de 1913, la Corte decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-504 de 2002 porque se correspondía a los mismos cargos y la misma norma. Se indicó en dicha ocasión que de acuerdo a las consideraciones establecidas en este precedente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338, *“(…) cuando se trate de tributos territoriales, la atribución del legislador es limitada, porque le corresponde a las asambleas y los concejos municipales crear o autorizar la creación de los mismos, pudiendo la ley, a lo sumo, establecer algunos de sus elementos tales como el sujeto activo y el sujeto pasivo”*, es decir que le corresponde a las asambleas y concejos la competencia para fijar los demás elementos impositivos, para preservar la autonomía fiscal que garantiza la Constitución”.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. “ (...)”

Así mismo prescribe en el artículo 365 que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, debiendo garantizar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. A su vez el artículo 334 dispuso que *“le corresponde al Estado intervenir en los servicios públicos para racionalizar la economía, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”*.

El artículo 311 Constitucional señala que:

“Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.

La Ley 136 de 1994 en su artículo 3º. modificado por el artículo 6º. -1 de la Ley 1551 de 2012, consagró que le corresponde al municipio “administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley”.

En relación con el impuesto de alumbrado público, la Ley 1819 de 2016³ en el Capítulo IV artículo 349⁴ se refirió a los elementos de la obligación tributaria, indicando:

“Artículo 349. Elementos de la obligación tributaria. Los municipios y distritos podrán, a través de los concejos municipales y distritales, adoptar el impuesto de alumbrado público. En los casos de predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, los concejos municipales y distritales podrán definir el cobro del impuesto de alumbrado público a través de una sobretasa del impuesto predial.

³ por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.

⁴ La Corte Constitucional en Sentencia C-130 de 2018 de revisión de constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1819 de 2016 señaló: “90. En este caso se comprueba que el legislador no quiso optar por la fórmula de la contribución especial que utilizó en el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018”[96], porque atendiendo al precedente establecido en la Sentencia C-272 de 2016, estimó que no se puede utilizar esta figura tributaria en el caso del cobro del servicio de alumbrado público, ya que en este caso no se puede tener en cuenta como sujetos pasivos del tributo a supuestos beneficiarios individuales, ya que se trata de una solventar una necesidad general que no pretenden incrementar utilidades individuales ni beneficiar sujetos particulares, sino que, como se dijo en aquella ocasión, tiene como objetivo proteger intereses generales como por ejemplo incrementar las condiciones de seguridad de la población y proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes”.

El hecho generador del impuesto de alumbrado público es el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público. Los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas serán establecidos por los concejos municipales y distritales.

Los demás componentes del impuesto de Alumbrado Público guardarán principio de consecutividad con el hecho generador definido en el presente artículo. Lo anterior bajo los principios de progresividad, equidad y eficiencia.

Parágrafo 1°. Los municipios y distritos podrán optar, en lugar de lo establecido en el presente artículo, por establecer, con destino al servicio de alumbrado público, una sobretasa que no podrá ser superior al 1 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

Esta sobretasa podrá recaudarse junto con el impuesto predial unificado para lo cual las administraciones tributarias territoriales tendrán todas las facultades de fiscalización, para su control, y cobro.” “(...)”

A su turno el artículo 350 sobre fijó la “destinación”⁵de los recursos del tributo así:

“Artículo 350. Destinación. El impuesto de alumbrado público como actividad inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado.

Parágrafo. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación del impuesto a la actividad de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos”

Sobre el recaudo del impuesto de alumbrado público la ley realizó unas precisiones:

“Artículo 352. Recaudo y facturación. El recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios. Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar como agentes recaudadores del impuesto, dentro de la factura de energía y transferirán el recurso al prestador correspondiente, autorizado por el Municipio o Distrito, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Durante este lapso de tiempo, se pronunciará la interventoría a cargo del Municipio o Distrito, o la entidad municipal o Distrital a fin del sector, sin perjuicio de la realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del servicio. El Municipio o Distrito reglamentará el régimen sancionatorio aplicable para la evasión de los contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna contraprestación a quien lo preste”.

⁵ La Corte Constitucional en Sentencia C-130 de 2018 concluye sobre la destinación específica de los recursos del impuesto de alumbrado público: “105. En conclusión la Corte ha dispuesto que la prohibición contenida en el artículo 359 de la C. Pol. de establecer rentas con destinación específica, se refiere a los impuestos de carácter nacional. Esta prohibición tiene como objetivo proteger las rentas que se van a distribuir a las entidades territoriales mediante la descentralización fiscal a través del sistema general de participaciones y los ingresos corrientes de la Nación. En cuanto al impuesto derivado del servicio público no domiciliario de alumbrado público, se estableció jurisprudencialmente que la destinación de los recursos de este impuesto para sufragar los gastos derivados de la prestación de este servicio no va en contra de la prohibición contenida en el artículo 359 de la C. Pol., siempre y cuando el legislador no establezca la tarifa, ni conceda exenciones directamente”.

Respecto de la prestación del servicio de alumbrado público específicamente, está regulado en el Decreto el Decreto 2424 de 2006⁶, compilado en el Decreto 1073 de Mayo 26 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, modificado este por el Decreto 943 de Mayo 29 de 2018 que modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público, quedando así:

“Artículo 2.2.3.1.2. Definiciones. Para efectos de la interpretación y aplicación del presente Título, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: “(...)”

Servicio de alumbrado público: Servicio público no domiciliario de iluminación, inherente al servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de dar visibilidad al espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades.

El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el desarrollo tecnológico asociado a él, y la interventoría en los casos que aplique.

Parágrafo. No se considera servicio de alumbrado público la semaforización, los relojes digitales y la iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos de uso residencial, comercial, industrial o mixto, sometidos al régimen de propiedad horizontal, la cual estará a cargo de la copropiedad.

Se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no se encuentren a cargo del municipio o distrito, con excepción de aquellos municipios y distritos que presten el servicio de alumbrado público en corredores viales nacionales o departamentales que se encuentren dentro su perímetro urbano y rural, para garantizar la seguridad y mejorar el nivel de servicio a la población en el uso de la infraestructura de transporte, previa autorización de la entidad titular del respectivo corredor vial, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 1682 de 2013.

Tampoco se considera servicio de alumbrado público la iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos, pese a que las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación del impuesto a dichas actividades, de conformidad con el parágrafo del artículo 350 de la Ley 1819 de 2016.”

Sobre la prestación del servicio de alumbrado público señala:

Artículo 2.2.3.6.1.2. Prestación del servicio. Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, o a través de

⁶ “Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público”

empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable.

De conformidad con lo anterior, los municipios o distritos deberán garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de alumbrado público, así como los niveles adecuados de cobertura.

Parágrafo 1°. La modernización, expansión y reposición del sistema de alumbrado público debe buscar la optimización de los costos anuales de inversión, suministro de energía y los gastos de administración, operación, mantenimiento e interventoría, así como la incorporación de desarrollos tecnológicos. Las mayores eficiencias logradas en la prestación del servicio que se generen por la reposición, mejora, o modernización del sistema, deberán reflejarse en el estudio técnico de referencia.

Parágrafo 2°. Los municipios o distritos tendrán la obligación de incluir en rubros presupuestales y cuentas contables, independientes, los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos obtenidos por el impuesto de alumbrado público, por la sobretasa al impuesto predial en caso de que se establezca como mecanismo de financiación de la prestación del servicio de alumbrado público, y/o por otras fuentes de financiación. Cuando el servicio sea prestado por agentes diferentes a municipios o distritos, estos agentes tendrán la obligación de reportar al ente territorial la información para dar cumplimiento a este parágrafo.”

“Artículo 2.2.3.6.1.4. Régimen de contratación para la prestación del servicio de alumbrado público a través de terceros. Los contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público que suscriban los municipios o distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, incluyendo los instrumentos de vinculación de que trata la Ley 1508 de 2012 o la disposición que la modifique, complemente o sustituya”.

A su vez la Ley 1150 de 2007 en su artículo 29 dispuso que los municipios o distritos pueden entregar a terceros en concesión, la prestación del servicio de alumbrado público, sujetándose para esto a las disposiciones previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así también indicó: “La Creg regulará el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación de este servicio especial inherente a la energía”.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG

La comisión de Regulación en desarrollo de la facultad conferida en la normatividad precedente expidió entre otras, la Resolución 122 de 2011, la cual regulo lo concerniente al contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de

energía del impuesto creado por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación del servicio de alumbrado público, modificada por la Resolución No.005 de 2012 “Por la cual se determinan los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplir los procesos de cogeneración y se regula esta actividad” en la siguiente forma:

ARTÍCULO 1. Modificar las definiciones de Costo de facturación y recaudo conjunto del impuesto de alumbrado público, así como de Facturación, contenidas en el artículo 2 de la Resolución CREG 122 de 2011, las cuales quedaran de la siguiente manera:

(...)

“Facturación: Corresponde a las actividades de recepción de información sobre los sujetos pasivos objeto del impuesto de alumbrado público reportada por el municipio o distrito, totalizar en el mismo cuerpo de la factura de energía eléctrica, pero de manera separada el valor correspondiente al impuesto al alumbrado público y distribuirla entre sus usuarios. También se encuentran dentro de estas actividades la de emitir la factura del impuesto de alumbrado público de forma independiente del servicio domiciliario de energía eléctrica, cuando así lo solicite el usuario”.

“ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 3° de la Resolución CREG 122 de 2011 el cual quedara de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3. Contrato y/o convenio de facturación y recaudo conjunto. El contrato y/o convenio de facturación y recaudo tiene como objeto determinar las condiciones en las cuales una empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica, totaliza en el cuerpo de la respectiva factura el valor correspondiente al impuesto al alumbrado público, recauda el impuesto de alumbrado público de manera conjunta con el servicio público domiciliario de energía eléctrica y/o factura de manera separada dicho impuesto si así lo solicita el usuario.

En este evento, el Municipio deberá establecer el procedimiento correspondiente para evitar la evasión fiscal.

El contrato y/o convenio de facturación y recaudo es celebrado por una empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica y el municipio o distrito, quien es el responsable de la prestación del servicio de alumbrado público”.

En relación con las obligaciones a cargo del prestador del servicio de energía señaló:

“ARTÍCULO 3. Modificar el artículo 6° de la Resolución CREG 122 de 2011 el cual quedara así:

ARTÍCULO 6. Obligaciones del prestador del servicio público de energía eléctrica. El contrato de facturación y recaudo conjunto deberá contener las obligaciones y deberes que correspondan al prestador del servicio de energía eléctrica, las cuales deberán determinarse en forma expresa, clara y concreta. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, las exigidas por la Ley y en la presente Resolución, el prestador del servicio público de energía eléctrica deberá:

1. Efectuar la facturación del impuesto al alumbrado público según las condiciones indicadas en el contrato y en esta resolución.
2. Totalizar en el cuerpo de la factura de energía eléctrica el valor correspondiente al impuesto al alumbrado público, indicando claramente el concepto e incluyendo la información mínima establecida en

el artículo 7° de la presente resolución, realizar el recaudo de dicho impuesto de manera conjunta con el servicio domiciliario de energía eléctrica y en caso de ser requerido por el usuario, facturar de manera separada el valor del respectivo impuesto.

3. Efectuar el recaudo del impuesto al alumbrado público sólo a sus usuarios registrados en la base de datos de la empresa de acuerdo con la información sobre los sujetos pasivos del impuesto, reportados por el municipio o distrito.

...

6. Trasladar el recaudo al municipio o distrito, en las fechas y plazos establecidos en el respectivo contrato, junto con la información relativa a los valores facturados y recaudados". "(...)".

En el nivel territorial, Distrito de Santiago de Cali, se emitió el Decreto Extraordinario N° 411.0.20. 0259 de Mayo 06 2015⁷ que dispuso sobre el Impuesto de alumbrado público:

"Artículo 174: Definición: Es el impuesto sobre el servicio de alumbrado público que cobra el Municipio de Santiago de Cali a sus habitantes con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del Municipio. El servicio de alumbrado público, comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público y, la administración, operación, mantenimiento, expansión, modernización y reposición del sistema de alumbrado público". (Art. 169 del Acuerdo 0321 de 2011)

"Artículo 176: Recaudación y pago: Son agentes de recaudo de este impuesto, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios que atienden a los usuarios a que alude el presente Capítulo. Las Empresas que prestan los Servicios Públicos Domiciliarios, en su calidad de agentes de recaudo, podrán facturar el impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público, no sólo en la expedida para el cobro del servicio público de energía, sino también, en la facturación de cualquier servicio público que presten." (Arl. 171 del Acuerdo 0321 de 2011)

Posteriormente el Acuerdo 0434 de 2017, "Por el cual se modifican parcialmente el estatuto Tributario Municipal y se dictan otras disposiciones", en su artículo 22 efectuó la siguiente modificación:

"Artículo 22: MODIFIQUESE: el artículo 171 del Acuerdo 321 de 2011, compilado en el artículo 176 del decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015, el cual quedará así: Artículo 176: Recaudo y Facturación: El recaudo del impuesto de alumbrado público podrá efectuarse directamente por el organismo competente dentro de la Administración Municipal o a través de Empresas Comercializadoras de energía y podrá realizarse mediante facturas de servicios públicos domiciliarios.

Las Empresas Comercializadoras de energía podrán actuar como agentes recaudadores del impuesto dentro de la factura de energía y transferirán los recursos recaudados al Municipio de Santiago de Cali o a quien este designe, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Durante este lapso de tiempo, se pronunciará el supervisor y/o interventor de la Unidad Administrativa Especial de

⁷ "POR EL CUAL SE COMPILAN LOS ACUERDOS 0321 DE 2011, 0338 DE 2012, 0339 DE 2013, 0346 DE 2013, 0357 DE 2013 Y EL 0380 DE 2014, QUE CONFORMAN EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL"

Servicios Públicos-UAESPM, sin perjuicio de la realización del giro correspondiente al de la continuidad en la prestación del servicio; independientemente de la fiscalización a cargo del Departamento Administrativo de Hacienda. (..)"

Jurisprudencia

La Corte Constitucional ha expresado sobre el impuesto de alumbrado público:

"(...)"

"El alumbrado público es un servicio público no domiciliario que tiene como finalidad la de proporcionar de manera exclusiva la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del municipio o distrito, así como permitir transitar con seguridad, evitar accidentes y proporcionar una mejor estética a los lugares públicos que lo reciben. La normatividad constitucional, legal, así como la jurisprudencia de esta Corporación, han establecido que la prestación de este servicio público está en cabeza de los municipios y distritos, y que para su financiación se pueden llegar a cobrar a través de la factura del servicio de alumbrado público o una sobretasa al impuesto predial para así mantener y garantizar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, se ha señalado que el cobro de este tributo tiene la forma de impuesto y no de una contribución especial ni de una tasa, pues, tiene como finalidad el interés general y no uno particular o privado; en efecto, beneficia a toda la comunidad al procurar la protección de su seguridad, vida y bienes.

Así entonces, el alumbrado público es un impuesto porque el contribuyente está obligado a pagar el tributo sin recibir ninguna contraprestación por parte del Estado y no existe una retribución particular o individual por parte del Estado; de por medio existe así, un beneficio que es de interés general y público, el cual consiste en garantizar la iluminación colectiva y su mantenimiento, modernización, reposición y ampliación; es así, un beneficio común y para garantía de los derechos de toda la comunidad."⁸.

El Consejo de Estado, manifestó en sentencia sobre el impuesto de alumbrado público:

"..."

"En ese contexto, frente al impuesto sobre el servicio de alumbrado público, se estableció como objeto imponible la prestación misma del servicio, y la concreción del hecho gravable, que consiste en ser usuario potencial o receptor del mismo, se dio a partir de diferentes fuentes normativas, lo que fue puesto de presente por la Sala al precisar que "[...] el objeto imponible es el servicio de alumbrado público y, por ende, el hecho que lo genera es el ser usuario potencial receptor de ese servicio"⁹ ¹⁰

En consecuencia, el impuesto al servicio de alumbrado público recae sobre quienes se benefician directamente del servicio o quienes son usuarios potenciales del mismo; para lo cual se requiere ser parte de la colectividad en condición de residente del respectivo ente municipal.

⁸ Corte Constitucional Sentencia C-130 de 2018, donde se declaran EXEQUIBLES los apartados demandados de los artículos 350, y 351 de la Ley 1819 de 2016 por los cargos analizados en esta providencia. y Declara EXEQUIBLE la expresión "en la determinación del impuesto" contenida en el parágrafo 2º del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016.

⁹ Sentencia del 11 de marzo de 2010, Exp. 16667 C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Magistrada ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Sentencia de 24 de mayo de 2018, Radicado nro. 54001-23-33-000-2016-00163-01 (23267). Nro. interno 23267.

En cuanto a la naturaleza del impuesto al servicio de alumbrado público, esta Corporación ha señalado:

“De la naturaleza del tributo derivado del servicio de alumbrado público se ocupó la Sala en sentencia en la que precisó que se trata de un impuesto porque i) del servicio que lo genera gozan todos los habitantes de una jurisdicción territorial, quieran o no acceder al mismo; ii) se genera por la mera prestación del servicio; iii) se cobra indiscriminadamente a todos sus beneficiarios y iv) el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio de acuerdo con las condiciones en que se preste, sin que pueda derivarse una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que se accede habitual o esporádicamente”¹¹

En este sentido manifestó la alta corporación:

“El servicio de alumbrado público, que constituye el objeto imponible del tributo, es un derecho colectivo cuya prestación oportuna y eficiente está a cargo de los municipios, mediante los recursos que suministran los contribuyentes para financiar y garantizar su sostenibilidad y expansión. Por tratarse de un derecho de interés general, deben contribuir a su financiación todos los miembros de la colectividad que se benefician potencialmente del servicio porque, como se dijo, el hecho generador del impuesto de alumbrado público es ser usuario potencial del servicio, calidad que ostentan los sujetos que residen en la jurisdicción municipal, sin que importe si lo reciben o no de forma permanente pues, por su naturaleza, está en constante expansión”¹²

De lo expuesto en precedencia, se desprende que el servicio de alumbrado público es un servicio público no domiciliario, inherente al servicio de energía eléctrica, y se presta con la finalidad de suministrar la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de circulación de tipo vehicular o peatonal, para brindar a la ciudadanía seguridad y visibilidad, en el área urbana o rural del ente territorial para el normal desarrollo de las actividades.

Conforme lo prescribe la precitada normativa constitucional y legal, la prestación del servicio de alumbrado público está a cargo de los municipios y distritos, el cual podrán prestar en forma directa o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores de este servicio. Corresponsiéndole a dichas entidades brindar la continuidad y calidad en la prestación del servicio y garantizar niveles óptimos de cobertura.

Ahora cuando la prestación del servicio de alumbrado público se realice a través de terceros, los contratos que celebren los municipios o distritos con los prestadores del

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Magistrada ponente Consejero ponente: Milton Chaves García, Radicación número: 44001-23-33-000-2013-00153-01(22892) de 18 de octubre de 2018

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto, Radicación número: 44001-23-31-000-2011-00161-01 (22088), 25 de septiembre de 2017.

mismo, se registrarán por las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, en virtud de lo preceptuado en el artículo 2.2.3.6.1.4. del Decreto 1073 de 2015 modificado por el Decreto 943 de 2018 en concordancia con el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007.

Acorde con la regulación, el servicio de alumbrado público comprende las siguientes actividades: el suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el desarrollo tecnológico asociado a él, y la interventoría en los casos que aplique. Igualmente la norma indico las actividades que no se encuentran comprendidas dentro del servicio de alumbrado público, obsérvese: la semaforización, los relojes digitales y la iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos de uso residencial, comercial, industrial o mixto, sometidos al régimen de propiedad horizontal, la cual estará a cargo de la copropiedad.

Ahora, respecto del impuesto de alumbrado público se ha decantado que el cobro de este tributo tiene el carácter de impuesto y no de una contribución especial ni de una tasa, pues, el contribuyente está obligado a pagar el tributo sin recibir ninguna contraprestación por parte del Estado y tiene como finalidad el interés general y no uno particular o privado; en tanto garantiza la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de circulación de tipo vehicular o peatonal y su mantenimiento, modernización, reposición y ampliación; es así, un beneficio común y para garantía de los derechos de toda la comunidad.

Por virtud de la ley 1819 de 2016 mencionada, los municipios y distritos podrán a través de los concejos municipales y distritales, adoptar el impuesto de alumbrado público. Es de advertir que el legislador se refirió a los elementos esenciales del tributo fijando el hecho generador, determinándolo como el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público, pero dejó la definición de los restantes elementos esenciales del tributo -base gravable, sujeto pasivo y tarifa- a los Concejos municipales o distritales, sin perjuicio de la autonomía territorial, (art. 287-3 C.P.)

Así, el Distrito de Santiago de Cali, en ejercicio de la facultad conferida y acorde con la autonomía tributaria derivada, determinó en el Estatuto tributario - Acuerdo 0434 de 2017, art. 22- que el recaudo del impuesto de alumbrado público “podrá efectuarse directamente por el organismo competente dentro de la Administración Municipal o a través de Empresas Comercializadoras de energía y podrá realizarse mediante facturas de servicios públicos domiciliarios.”

En este evento, las Empresas Comercializadoras de energía podrán actuar como agentes recaudadores del impuesto dentro de la factura de energía y transferirán los recursos recaudados al Municipio de Santiago de Cali o a quien este designe, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Es decir, la ley faculta a las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica para que funjan como agentes recaudadores del impuesto con las obligaciones que se derivan de tal actividad.

Para estos efectos, conforme la regulación de la CREG el contrato y/o convenio de facturación y recaudo a celebrar entre la entidad territorial y el prestador del servicio de energía eléctrica, deberá contener las condiciones en las cuales una empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica, recauda el impuesto de alumbrado público de manera conjunta con el servicio público domiciliario de energía eléctrica y/o factura de manera separada dicho impuesto si así lo solicita el usuario. Es de anotar al respecto que el servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrán ninguna contraprestación a quien lo preste.

Mientras transcurre los 45 días para que el agente retenedor transfiera los recursos al Municipio, “se pronunciará el supervisor y/o interventor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESPM, sin perjuicio de la realización del giro correspondiente al de la continuidad en la prestación del servicio; independientemente de la fiscalización a cargo del Departamento Administrativo de Hacienda”.

En este orden de ideas, podemos concluir que tanto el impuesto de alumbrado público como la prestación del servicio de alumbrado público poseen su propio fundamento constitucional y legal, son diferentes en la medida que la prestación del servicio comprende diversas actividades: el suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el desarrollo tecnológico asociado a él, y la interventoría; como la administración del tributo: la fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones; sin embargo tienen relación inescindible por cuanto la prestación del servicio de alumbrado público, se financia con los recursos provenientes del impuesto de alumbrado público, conforme a destinación que le otorgó la ley 1819 de 2016 a los recursos provenientes del impuesto de alumbrado público.

El Decreto Extraordinario 411.010.20.0516 de septiembre 28 de 2016¹³. determina la estructura de la administración central y las funciones de los organismos, entre estos, los Departamentos Administrativos y las Unidades, señalando respecto de los Departamentos Administrativos que estos son organismos principales de la administración central y en tal sentido tienen a su cargo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen, en concordancia con la Ley 489 de 1998¹⁴ véase:

“Artículo 21. Departamentos Administrativos. Los departamentos administrativos son organismos principales de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, sin personería jurídica, que cuentan con autonomía administrativa para el desarrollo de la función pública a su cargo, y que tienen como objetivo fundamental dar soporte técnico para la formulación de políticas, planes generales, programas y proyectos municipales y, en su especialidad técnica, formulan, adoptan y ejecutan políticas, planes generales, programas y proyectos transversales, que dan soporte técnico y administrativo a la gestión pública a cargo de los demás organismos municipales”.

Por su parte, las Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica están adscritas o vinculadas a los organismos principales, y cumplen sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que señale el ordenamiento jurídico¹⁵. Así, la UAESPEM se encuentra adscrita¹⁶ a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat e integra el Sector Administrativo Vivienda Social y Hábitat^{17 18} :

“Artículo 25. Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica. Las Unidades Administrativas Especiales son organismos del Nivel Central de la Administración Municipal, que carecen de personería jurídica, cuentan con autonomía administrativa para el desarrollo de la función pública a su cargo, y que tienen por objeto desarrollar o ejecutar programas propios de un organismo principal de la Administración Municipal”.

¹³ Artículo 16.

¹⁴ Artículo 39. *Integración de la Administración Pública.* (...)

Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de la Administración en el correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados, cumplen sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que señalen la ley, las ordenanzas o los acuerdos, según el caso. “(...)”

¹⁵ Ley 489 de 1998, artículo 67

¹⁶ Artículo 215 del Decreto Extraordinario 411.010.20.0516 de septiembre 28 de 2016

¹⁷ “Artículo 211. Integración del Sector Administrativo Vivienda Social y Hábitat. El sector Administrativo Vivienda Social y Hábitat está integrado por:

La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales - UAESPM, adscrita a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat”.

¹⁸ “2. Nivel Sectorial.

El nivel sectorial está orientado fundamentalmente al ejercicio de funciones administrativas y a la prestación de servicios públicos en beneficio de la comunidad, y se encuentra conformado por los siguientes sectores administrativos de coordinación: (...)

2.10. Sector Vivienda Social y Hábitat....”

Como se anotó inicialmente, en el artículo 222 del Decreto Extraordinario en mención se asigna las funciones a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales-UAESPM, relacionadas con la dirección y coordinación, la evaluación y seguimiento del servicio de alumbrado público, así como administrar la prestación del servicio de alumbrado público y supervisar los prestadores del mismo, en armonía con el propósito de la Unidad y con la naturaleza del organismo de una Unidad, así como su inclusión al sector Sector Vivienda Social y Hábitat orientado a la prestación de servicios públicos a la comunidad.

Por su parte el Departamento Administrativo de Hacienda, conforme las funciones que le fueron asignadas, artículo 67-1, le corresponde “La administración de los tributos municipales, que no sean competencia de otro organismo o entidad municipal. La administración de los tributos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, función que se encuentra acorde con la naturaleza del departamento administrativo.

De otra parte, la administración del impuesto de alumbrado público no está asignada a ningún otro organismo de la administración central, de conformidad con el D. E. 411.010.20.0516 de 2016, ni en particular a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales-UAESPM, como se anotó sus funciones dicen relación con la prestación del servicio de alumbrado público.

Así las cosas, le corresponde al D.A. de Hacienda en virtud de lo dispuesto en el artículo 67-1 del D. E 411.010.20.0516 de 2016, la administración del Impuesto de Alumbrado público, consecuente con la función de autoridad y ente rector del ramo o especialidad de la administración que le ha sido asignada, en este caso, la administración de los tributos¹⁹. Téngase en cuenta que el artículo 176 modificado del Estatuto Tributario definió la actividad de fiscalización a cargo del Departamento Administrativo de Hacienda.

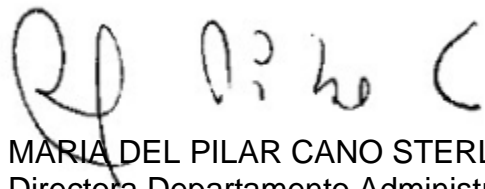
Como quiera que al Departamento Administrativo de Hacienda le corresponde realizar el recaudo del tributo, por ende si el recaudo del impuesto de alumbrado público se va a realizar a través de las empresas comercializadoras de energía, facultadas por la ley para ello, le compete al D.A. de Hacienda estructurar los contratos de recaudo atendiendo lo dispuesto en la reglamentación vigente.

¹⁹ D. E. 411.010.20.0516 de 2016, artículo 23-1

Para finalizar, reiteramos que en lo referente a la suscripción de los referidos contratos de recaudo y facturación, como los demás aspectos contractuales le corresponde al Departamento Administrativo de Contratación dar los lineamientos en la materia, como se anotó.

En los anteriores términos se absuelve la solicitud de concepto formulada a este Organismo.

Cordialmente,



MARIA DEL PILAR CANO STERLING
Directora Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

Proyectó: Evelyn M. Obregón I. - Asesora
Revisó: Manuel Francisco Arango Zambrano - Subdirector Doctrina y Asuntos Normativos